



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

Salta, 25 de abril de 2024.

Y VISTA:

Esta causa nro. **FSA 326/2019/CA1** caratulada “**G■■■■■, Diego Armando y otros s/ infracción ley 22.415**”, originaria del Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán, y:

RESULTANDO:

1) Que se elevan estas actuaciones en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas: a) oficial de Lourdes J■■■■■; Federico T■■■■■ C■■■■■ y Víctor Hugo C■■■■■; b) particular de Rodrigo Nicolás M■■■■■ contra sus respectivos procesamientos.

A T■■■■■ C■■■■■ y C■■■■■ se los procesó, sin prisión preventiva, como autores del delito de encubrimiento de contrabando agravado por habitualidad y a J■■■■■ y M■■■■■ además de ese delito se los procesó como coautores de lavado de activos, en el caso de M■■■■■, también por cohecho pasivo; todos en concurso real.

También, se trabó embargo sobre sus bienes por la suma de dos millones de pesos (\$2.000.000) a cada uno.

2.a) Que la defensa oficial de J■■■■■, T■■■■■ C■■■■■ y C■■■■■ sostiene que la resolución apelada se dictó luego de casi tres años desde que se les recibió declaración indagatoria a sus asistidos, por lo que entiende que se encuentra



vencido el plazo del art. 306 del C.P.P.N.; circunstancia que, a su criterio, afecta la garantía constitucional a ser juzgados en un plazo razonable.

Indica que la agravante de habitualidad prevista en el artículo 874 inciso 3 apartado “b” de la ley 22.415 fue erróneamente aplicada, dado que ni J[REDACTED] ni T[REDACTED] C[REDACTED] poseen condenas por este tipo de conductas, y la que obra respecto a C[REDACTED], es posterior al hecho imputado.

Por otra parte, se agravia respecto al delito de lavado de activos atribuido a J[REDACTED], en tanto sólo se probó que esta última tuvo ingresos no registrados al dedicarse transitoriamente a “vender verduras en la feria”, lo que no equivale a sostener que estos provengan de actividades ilícitas. Agrega que los bienes adquiridos por la nombrada (una motocicleta y un vehículo modelo 2007) no superan el monto de punibilidad que al que refiere el tipo penal.

Por último, considera excesivo el embargo trabado sobre los bienes de sus asistidos.

Ante esta Alzada, el defensor oficial coadyuvante se limitó a solicitar que se tenga por fundado el recurso con los argumentos vertidos por su par de la instancia anterior, sin agregar ninguno nuevo.

2.b) Que, la defensa de M[REDACTED] sostiene que el procesamiento es arbitrario por la falta de prueba de cargo, calificando como atípico al comportamiento atribuido a su representado.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

En la oportunidad brindada por el artículo 454 del C.P.P.N., introduce un agravio por exceso en el plazo razonable y respecto de la falta de prueba para procesar a M[REDACTED] señala que en el allanamiento de su domicilio únicamente se incautó un vehículo antiguo, sin ningún elemento de relevancia para la causa.

En relación a las intervenciones telefónicas, refiere a la conversación acerca de un procedimiento realizado en la Sección “28 de Julio” de la Gendarmería Nacional -en donde se detuvo a Diego Armando G[REDACTED] (procesado no apelante) secuestrándosele un arma 9 mm. sin documentación-. Refuta que de ese dialogo -a diferencia de lo valorando en el procesamiento-, no surge con claridad a qué se refiere M[REDACTED] con la exigencia de \$75.000, siendo que para la defensa también podía estar vinculado al importe de la multa que debía abonar G[REDACTED], y no a el “retorno” reclamado como se afirmó en la resolución apelada.

Sumado a ello, manifiesta que no se encuentra probado el elemento subjetivo de la figura de cohecho.

Por último, respecto al delito de lavado de activos, expresa que el gendarme M[REDACTED] vive de sus ingresos salariales y que no se enriqueció ni antes ni después del hecho en cuestión, careciendo de “bienes de fortuna”.

3) Que el Fiscal General considera que la recepción de la mercadería de contrabando está comprobada con las actas de procedimiento y allanamiento, resultando de su avalúo



un monto que supera ampliamente la condición objetiva de punibilidad establecida por el artículo 947 del código aduanero.

Destaca que se encuentra probado el rol que los apelantes tenían en la maniobra ilícita, precisando que T■■■■ C■■■■ y J■■■■ oficiaban de barredores y campanas durante el transporte de la mercadería y, la última, además, la acopiaba en su domicilio; C■■■■ se encargaba de repartirla y venderla; y el gendarme M■■■■ brindaba información sobre la ubicación de las patrullas, entregando a G■■■■ y Z■■■■ (procesados no apelantes) parte de la mercadería que secuestraban para que estos la vendieran y ese producto era posteriormente recibido por M■■■■.

Respecto a la habitualidad con la que se desarrollaron las conductas, expresa que las constantes comunicaciones telefónicas mantenidas entre los imputados demuestra una cotidianeidad en esas actividades.

En relación al lavado de activos, manifiesta que, según los informes agregados por la AFIP, J■■■■ adquirió vehículos sin tener registrada actividad laboral alguna, teniendo como autorizado para conducir uno de esos rodados a su pareja T■■■■ (coprocesado no apelante) del que sería testaferro, por lo que sus adquisiciones no deben ser analizadas en forma individual, superando así la condición objetiva de punibilidad del art. 303 del Código Penal.

Respecto de Rodrigo Nicolás M■■■■, entiende que se encuentra probado que, como retribución por sus





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

tareas ilícitas recibía significativas sumas mensuales de dinero que dependían de la mercadería de contrabando comercializada por la organización criminal, las que rondaban entre \$75.000 y \$213.000. Afirma que, con esa cantidad de dinero de origen ilícito podría haber adquirido vehículos a su nombre o haberla introducido en el circuito económico mediante la compra en efectivo de bienes de consumo, convirtiéndolo así en dinero de aparente licitud.

4) Que las presentes actuaciones se iniciaron el 26/1/19 en virtud de un procedimiento realizado por personal de Gendarmería Nacional en ocasión de un control sobre la ruta nacional N° 50, en “Finca Demisa”, observándose al conductor de un vehículo Chevrolet Astra, dominio , que, al percatarse de la presencia policial realizó un giro abrupto sobre sí mismo, circunstancia que motivó un nuevo control, el cual fue embestido por el rodado, pero tras colocar una plancha de clavos, se detuvo el vehículo, escapando los ocupantes.

Del registro del automóvil se incautaron 12 cajas con un total de 600 cartones de cigarrillos marca RODEO cuyo avalúo, en esa fecha, ascendió a la suma de \$725.539 (cfr. fs. 17 y 32).

Luego de que el Fiscal Federal de Orán requiriera que se inicien tareas de inteligencia e investigación con la finalidad de individualizar a las personas involucradas (fs. 48), la preventora informó que la titular del vehículo era Ana Gabriela y como autorizado a Diego Armando G [REDACTED] (procesados no apelantes).

Fecha de firma: 26/04/2024

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARTIN GOMEZ DIEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#33094312#409361467#20240425122035898

Asimismo, se efectuaron consultas sobre sus antecedentes, surgiendo que G■■■■, además de tener a su nombre cinco rodados y una motocicleta, poseía varias causas por infracciones a la ley 22.415. Por otro lado, se solicitó el detalle de sus movimientos migratorios, desprendiéndose que el nombrado tiene registradas únicamente salidas a Bolivia y no así sus respectivos reingresos al país.

A fs. 57/62 la Gendarmería Nacional realizó averiguaciones en las cercanías del domicilio de Diego Armando G■■■■, concluyendo que, junto a Ana Gabriela ■■■■, Diego T■■■■ (entre otros), podrían estar vinculados con actividades de contrabando, en virtud de que existe un extenso intercambio de llamadas entre ellos, sumado a los antecedentes que registra el primero en su mayoría por infracción a la ley 22.415, a que todos tenían domicilio en el mismo lugar, a los datos aportados por los vecinos y a que no tendrían ingresos monetarios registrados para justificar sus patrimonios.

En ese contexto, luego de que el juez ordenó la intervención de las líneas telefónicas utilizadas por aquellos (fs.71/73), se confirmó la sospecha de la preventora, en tanto en un diálogo entre Lourdes J■■■■ y Diego G■■■■ del 9/8/19, la primera le manifestó: “ahí en el Paso hay un montón de campanas ahí, no están en el paso, en el desangre, en el desangre deben estar ... no pero esos milicos ya han salido, hay campanera ahí en el paso, han entrado un montón al paso. Campanera, todo. Están todos en el río, en el desangre no hay campana, la chiqui no ha ido ... yo si, si voy a ir mañana, pero que tal estaba el río





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

decían que estaba la patrulla ahí ... yo bueno ese día me hice doce carguitas nomás ese día tres carguitas a cada uno le di, y así le hice pechar de a tres de a tres así le hice venir no todo junto sino si me agarran, me agarran tres changos nomás y los otros están salvados”; a lo que el último le respondió: “ya le pregunto bien yo ... y como habrá que traer armada llevar más changos y que se larguen con tres cada uno será” (ver fs. 82/3).

También a fs. 78/94 obra el registro de una conversación del 19/8/19 entre J[REDACTED] y una persona denominada “Pelado”, en la que la imputada le dice “escóndela a la caja por ahí, yo que vos la escondo bien y carga por ahí en el monte, escóndelo bien dejando bien tapado y después mañana cuando vengamos, mañana a la mañana, mañana ya le sacas”.

Además es de relevancia el intercambio entre Lourdes J[REDACTED] y Diego G[REDACTED] de fecha 20/8/19, en las que él le manifiesta: “yo le voy a preguntar bien, si es que en verdad le han agarrado a Pelado y cuanta carga le ha quitado ..., el se comunica con David nomás, porque mi celular para más intervenido ...”.

A fs. 132 vta. se agregó un diálogo del 4 /11/19 entre el apelante Rodrigo Nicolás M[REDACTED] -luego identificado como miembro de la Gendarmería Nacional- y G[REDACTED], a quien le dijo: “quédate ahí, los vagos cuando ya estén adentro de Carmelita vos entras y ahí te la van a dejar al costado, son seis cargas en total”.



A fs. 133 vta./134 se transcribieron mensajes de texto del 5/12/19 entre David Z [REDACTED] (procesado no apelante) y el usuario 38 [REDACTED], que luego se determinó era usado por el gendarme M [REDACTED], en la que se mantienen informados sobre la ubicación de las patrullas, manifestándole el segundo “se fue el bora rojo ya”, “28 está por San Pablo”, “ojo volvió 28 espera q te avise para salir pecha x playa”, “te van a cortar x dtras d la escuelita esta libre”, contestándole el primero “dale avisa ty yend a pechar”, “yendo a Orán kasi m agarran a mi gente”.

A fs. 136 vta./137 se agregaron mensajes del 11/12/19 en los que M [REDACTED] le preguntó a G [REDACTED] “¿cuanto bajo la coca?” respondiendo este último “18 dejaron hoy y yo estaba entregando a 20 hasta k llego me kedo pokito nomás pero me quedo”, “k hay hoja o cigarro”; “me hago prestar otra kangooo o voy en el astra y fluuu”. Seguidamente, M [REDACTED] le preguntó “¿la coca de ayer me la das al 20?” y agrega “veni en la kangoo, aquí te digo que hay”, “5 caja r7 rodeo 6 chanchos suelta tráeme el doble de cuarto”, “tus changos escaparon”.

El 17/12/19 el gendarme M [REDACTED] alerta a Zambrano sobre controles policiales “cayó el cónsul boliviano de Orán por cocaína”, “a dale hasta las 19 hay una patrulla del escuadrón después se van” “y cubren la escuelita esos lados de aguas a 28” (cfr. fs 161).

En la misma fecha, M [REDACTED] le dice a Zambrano “hoy está el gringo espera hasta la noche para peliar”, “había una patrulla en camioneta hasta las 19 del escuadrón”; “por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

la escuelita”, “si la patrulla del escuadrón están hasta las 19 de lunes a viernes”, “ok, el gringo estaba en 28 pero igual ojo hasta que sea de noche pecha” y luego Zambrano le escribe “k sabe d adentro ay o n así pecho” a lo que M [REDACTED] le contesta “libre”.

El 30/12/19 M [REDACTED] le hace saber a Z [REDACTED] que “no manden hoy, hay operativos”, “hasta mañana al mediodía va a estar feo y no vamos a usar celu”; “vas a tener que esperar va a haber fijo en abra grande hasta las 9 de la mañana y de hay 28 va a rastrillar por mto y esos lados a cada rato” (fs. 168 vta.).

Luego Z [REDACTED] le pregunta al gendarme M [REDACTED] si estaba en el puesto 28 o si allí había algún conocido, dado que “Diego está detenido ... lo vio con la pistola ... la 9 creo que es (...)” contestándole M [REDACTED]: “se le va a hacer las actuaciones y lo van a dejar...le va a salir caro decile, porque me tuve que quemar yo hablando por él ahora, decile eso te digo, le va a salir más caro le digo si se enteran cae él y caigo yo. No, me dice, bueno mira, me dice, yo lo dejo supeditado, yo ahí le invento la historia al fiscal, le hago las actuaciones y se va pero le va a salir caro, me dice”.

El 5/1/20 M [REDACTED] le comenta a Z [REDACTED] que “el juzgado ordena la detención, el que quede supeditado digamos, que quede libre hasta que vaya a resolver y la mina me llamó, porque la mina esa me dijo ahí agarré a uno que trabaja con vos, quien le digo, y me dijo uno que le digo y como va queda y no se me dice porque tiene un arma ahí le encontramos ahí (...)”, a lo que seguidamente agrega “(...) mira le digo ahí me



dijo lo vago le digo el hermano, la hermana que hay plata le digo que si. Hablale vos a los vagos y le disfrazo y me dice ya te llamo... y ahí me llamó hace un rato y me dice mira yo le hago una supeditado si quiere me dice que el queda libre y el después va a tener que explicar de dónde sacó el arma y todo eso digamos no va a quedar más detenido me dice (...), ahí dicen que te va a salir caro (...)” “la mina quiere sacar plata viste” (cfr. fs 171).

A fs. 172 se transcribieron mensajes del 7/1/20 entre G [REDACTED] y M [REDACTED], en los que el último le manifiesta “che 75 me pidió la del 28, 15 para cada uno con eso borran el audio que me grabaron y declaran que solo encontraron un arma q no saben de quien era quieren para mañana”, “son 5 ellos dicen”, “che me llaman de 28 x el arreglo que me dijo cris. Le dije q es mucho y eso la mina solo arregla x 25 le dije q ya le confirmo así le doy mañana, q hago”.

A fs. 174 consta copia de la misma conversación sostenida entre Z [REDACTED] y M [REDACTED], en la que el segundo le expresa “pedían 50 x cabeza le dije q ya veía de última 25 mil x cabeza y me grabaron para q no me haga el boludo y quieren la plata”, “si hablas con Diego decile q me llame, lo llamé y escribí y nada mi gente quiere saber sobre la plata de la mercadería y 28 me está apurando”.

Asimismo, a fs. 175/vta., obran mensajes del 6/1/20 en los que M [REDACTED] le hace saber a G [REDACTED]: “lo de la coca es 213 mil lo que le dí en puchos a Cris 114 y la mensual, la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

mensual me urge más así ya cancelo lo otro, avísame al medio (...) claro, 7 chanchos y 2 cajas de rodeo y una de Hill (...) y ayer le di 9 cajas”.

Por otro lado, a fs. 193, se encuentra transcripta una comunicación de fecha 12/11/19 entre Diego G [REDACTED] y un tal “Rubén remisero” en la que el encausado le dice: “igual no importa, yo le aviso a la señora que vos vas a ir seguro, anda al depósito de la Lorena, vos no sé si has visto alguna vez un Astra parado ahí antes de llegar a la feria, un Astra negro dobla para arriba y justo ahí en la primera calle ahí hay un Astra negro, ahí tenés que descargar”.

El 7/12/19 M [REDACTED] le dice a Z [REDACTED] “dale anda al medio nadie se mete”, “dale ¿va en el astra?”, “Para saber si te marcaba”, “ok ¿saliste con toda la carga bien del agua?” “¿vos no tenes carga ya no así mando a 28?” (cfr. fs. 196/7)

El 20/1/20 Diego G [REDACTED], le pide a Lourdes J [REDACTED] “sepárame cinco rodeo ya viene carga en la madrugada, ¿escuchaste?”, “cinco rodeo nomás y los gil entrega no más no” respondiéndole J [REDACTED]: “dale, ahí están los rodeo pues yo estoy aquí en la casa” “si si ya no tengo, ya no hay fil ya” (cfr. fs. 201 vta).

Sumado a ello, según las tareas de investigación realizadas por la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de “Orán” de la Gendarmería Nacional,



que constan a fs. 207/vta., la persona que residiría en el domicilio referido por G[REDACTED] -a fs. 196/7- en donde habría un auto modelo Astra color negro, sería el apelante Víctor Hugo C[REDACTED].

Paralelamente, a fs. 241 se adjuntó copia de un mensaje de fecha 23/6/20 en el que G[REDACTED] le dice a Z[REDACTED] “era k vallas a campanearlo por lo menos Ana debe estar sin comer to” “si podes anda a fijarte si la lurdes ya está por aguas blancas fu”, “llamalo de nuevo y pregúntalo en k se fue para aguas blancas y k hicieron los chikas si demora en responder es xk están con los milis”. En este contexto, Z[REDACTED] le consulta a J[REDACTED] “dnd andas pudist salir?” a lo que la nombrada le responde “estoy escondida”.

El 29/6/20 se registró un diálogo en el que J[REDACTED] le dijo a Z[REDACTED] “dice el Diego que aliste una carga de rodeo (...)” (fs. 257).

El 18/9/20 J[REDACTED] mantuvo una conversación con T[REDACTED] en la que le manifestó que la policía había entrado a su casa mientras estaba su madre, a lo que T[REDACTED] le respondió “¿y no han sacado nada?” “pero no han entrado a revisar nada? ¿no han sacado nada?”, y J[REDACTED] le contestó “no” “claro, la mamá ha pensado que eramos nosotros creyendo que estábamos bajando las cosas” (a fs. 277 vta.).

Asimismo, el 22/9/20 Diego G[REDACTED] le preguntó a Federico T[REDACTED] C[REDACTED] “¿ya está todo en la finca?” a lo que este le contestó “si, escondida y todo” (cfr. fs. 278).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

5) Que, en esas condiciones, el 30/9/20 se ordenó el allanamiento de diversos domicilios de los investigados donde se acopiarían los cigarrillos de origen extranjero y hojas de coca, requiriéndose sus respectivas detenciones (fs. 298/303), secuestrándose del inmueble de G [REDACTED] en la ciudad de Orán: 75 kilos de hojas de coca en estado natural, 2.300 paquetes de cigarrillos de origen extranjero y una balanza, arrojando un avalúo total de \$ 837.769.

En el domicilio de Víctor Hugo C [REDACTED], también en la ciudad de Orán: 300 cartones de cigarrillos marca Rodeo, 16 kilos de hojas de coca, 4 bultos con la inscripción Living, 11 paquetes de gelatinas, 6 paquetes de caldo, 2 cajas de juegos bowl con 5 piezas cada uno, y 48 cartones de cigarrillos marca Hills, 13 cajas de caldos para saborizar, 6 docenas de crocs, 2 licuadoras, 1 juguera, 15 docenas de medias, 2 juegos de sábanas, 2 docenas de ropa interior, 4 coladores, 5 juegos de cubiertos por 24 utensilios cada uno, 1 cortadora de pelo, 2 planchas, 1 planchita de pelo, 7 balanzas, 4 cajas de focos y 4 cajas de caldo, arrojando un avalúo total de \$ 1.117.540 .

En el domicilio de Diego T [REDACTED] y Lourdes J [REDACTED] de la misma localidad: 2.350 cartones de cigarrillos marca Hills y Rodeo con un avalúo de \$ 4.954.178; 6 bultos con 110 kilos de hojas de coca con un avalúo de \$ 586.124, 1.800 lámparas de origen extranjero, 1 balanza digital, 2 parlantes, 1 televisor, 872 pares de medias.

En el domicilio de Silvestre Alejandro B [REDACTED], en Orán: 4 bultos con 100 kilos de hojas de coca en



estado natural y 11 bolsas similares a las utilizadas para el transporte de hojas de coca, con un avalúo de \$ 536.569.

En la residencia de Ana Gabriela Tito y Federico T■■■■ C■■■■, sito en la localidad de Aguas Blancas, Salta: teléfonos celulares, chips, pendrives, anotaciones y documentación varias, y los vehículos Chevrolet Astra, dominio 6 y Renault Kangoo, dominio A■■■■.

En el domicilio de Cristian David Z■■■■ ubicado en Aguas Blancas, Salta: teléfonos celulares y documentación.

En el inmueble de la localidad de Colonia Santa Rosa-Salta, donde residiría el gendarme Rodrigo Nicolás M■■■■: 1 teléfono celular y un vehículo Volkswagen Voyage dominio■■■■.

En la finca ubicada sobre RN 50 km. 64, casi a la altura del puente “Quebrada El Sevilar”, lugar presuntamente utilizado para el acopio de la mercadería en infracción a la ley 22415: teléfonos celulares.

El 7/10/20 se les recibió declaración indagatoria a M■■■■, T■■■■ C■■■■, C■■■■ y J■■■■, haciendo todos ellos uso de su derecho a no declarar, con la salvedad de C■■■■, quien expresó: “solamente quiero aclarar que soy solo pasador, a los otros los conozco de vista no tengo mucho contacto por lo que trabajaba con Diego G■■■■ el año pasado en el portón buscándole gente” (ver fs. 487/9, 531/3, 534/6 y 1076/8).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

Posteriormente, el 12/4/22 se les recibió ampliación de indagatoria a Rodrigo Nicolás M[REDACTED] y a Diego Armando G[REDACTED] por el delito de cohecho pasivo y activo respectivamente, y ambos se negaron a declarar.

A fs. 449 obra el acta de detención de Rodrigo Nicolás M[REDACTED], la que se produjo el 30/9/20, concediéndose su excarcelación el día 8/10/20.

6) Que a fs. 788/804 se incorporó el peritaje de los teléfonos incautados, en el que se destacaron mensajes de texto de un teléfono celular (cuya titularidad no fue especificada) hacia diversas líneas, entre ellas, las de M[REDACTED] y J[REDACTED], con las leyendas “pone gente en la ruta así nadie nos veeeeee...hola 25 me dice decime ke hacemos...moto patrulla en agua linda...van a avanzar... salió la verde para adelante y de oran venía la turbo...hay salió Martín cargado para Orán...estoy descargando la kangoo por suerte no salió aún descargamos y cargamos los 4tos son dos paquetes enteros...k ahy hoja o cigarro...cuantos son así veo como hago...ya estamos sacando las últimas cargas” (fs. 596 vta./598).

Asimismo, J[REDACTED] envió un mensaje que reza “voy por río blanco...yo estoy saliendo del mont veni” y el gendarme M[REDACTED] recibe y envía otros que dicen “tentos no funcionan nuestras radios se cayo una antena estamos incomunicados...dale r716 me dijiste y rodeo 11 que no salgo del escuadrón y te llamo así te digo como hacemos una caja y media de rodeo guarda mañana busco eso...5caja r7 4 rodeo 6 chanchos...la coca de ayer me la das a 20?...cuanto bajó la coca



?...tengo 2 cargas de coca...n hy operativo sn los camuflados...y se que tan en el monte...x el río no había nadie...n si el 28 está x ruta...mañana a la mañana tempran pods buscar en oran lo q saque después t digo q y el precio...estoy x salir d colonia te aviso cuando pase Irigoyen. total q me tenes q dar 217.500... al mediodía te aviso asi ns encontramos en la ypf asi me das y le doy a los mios...diego me diste 30 y eran 36 eran 4 cajas d r7 s 9 total 36...detenida en el escuadron mañana la tengo que llevar a la fiscalía...Diego me dijo cris que te pregunte si para mañana al medio dia vas a tener la plata dl arreglo q tenems mensual x q mi gente me pregunto así les doy...q camioneta es? Atento vuelve la d 28 estoy n oran control isla d caña...salgan toy en 28 aviso si hay algo...hay control...”.

A fs. 792 vta./795 M[REDACTED] le envió a Z[REDACTED] un mensaje “soy yo el de la carmelita, no digas nada... nosotros no acapas sea 28 ahora averiguo...carga chancheros y Sali aver si te cortan...ay milic x el tomate, avisam cuando salgan... es 28 seguro n están usando la radio saliste en el auto, borra todos los mensajes por las dudas...28 no está usando radio...”, a partir de lo cual la prevención dedujo que el gendarme M[REDACTED] pasaba información acerca de los controles policiales.

Lo mismo puede decirse de los diálogos por Whatsapp que M[REDACTED] tuvo con el procesado B[REDACTED] (no apelante) sobre los controles de ruta en la localidad de Pichanal y los beneficios económicos que obtenía de esa actividad de contrabando (cfr. fs. 800/805).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

Además a fs. 800/801 J[REDACTED] habla con otras personas en las que se refiere a paquetes de cigarrillos de las marcas que fueron incautadas y los precios a los que los vendía.

CONSIDERANDO:

1.1) Que, en cuanto al agravio sobre la lesión a la razonabilidad de la duración del proceso, corresponde recordar que “en principio, cuando el tiempo de su tramitación no exceda el lapso previsto en el art. 62 del C.P. para que opere la prescripción, no podrá considerarse vulnerado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable; no obstante, es dable concebir casos en los que la acción penal se encuentre vigente pero que aun siendo ello así, la violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable sea evidente, y en consecuencia surja la necesidad de poner fin a la persecución penal” (cfr. CFCP, Sala III en causa n° 51762/2019 caratulada “Menem, Carlos Saúl y otros s/ recurso de casación”, sent. del 27/12/19).

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación precisó que “la afectación a la garantía de ser juzgado sin dilaciones indebidas se encuentra limitada a la demostración de lo irrazonable de esa prolongación” (Fallos: 330:4539 y 333:433), ya que en la materia no rigen plazos automáticos ni absolutos. Antes bien, “la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, [...] por lo que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un número de días, meses o años” (Fallos: 322:360 y 327:327).

Fecha de firma: 26/04/2024

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARTIN GOMEZ DIEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#33094312#409361467#20240425122035898

No obstante, la propia Corte recalcó que “afirmar que los jueces no pueden fijar con precisión matemática cuál es el plazo razonable de duración de un proceso, no equivale a eximirlos de profundizar y extender los argumentos de su decisión, a fin de que la valoración pueda ser examinada críticamente y de evitar que se convierta en la expresión de una pura subjetividad” (Fallos: 327:327).

De lo expuesto se desprende que “el deber jurisdiccional consistirá en evaluar en cada caso concreto ciertas pautas de razonabilidad que revelen si efectivamente se ha violado de un modo palmario e injustificado la garantía en trato, sin enfatizar con exclusividad en una mera referencia temporal en abstracto” (cfr. CFCP, Sala IV en causa n° 57521/2020 caratulada “P., A. O. y otros s/ recurso de casación”, sent. del 16/10/20); de manera que “la referencia a las particularidades del caso aparece como ineludible” (cfr. esta Sala en autos N° 31016322/2012/38 caratulados “Heredia, Fortunato Carlos y Velásquez, Aldo Javier s/ infracción ley 23.737”, sent. del 22/11/16; N° 44000056/2010/18 /CA11, “Legajo de prórroga de prisión preventiva de Juan Carlos Jones Tamayo”, sent. del 30/7/18; N° 22000684/2001/CA1, “Rivero, Félix s/ uso de documento adulterado”, sent. del 29/11/18 y N° 12001489/2000/CA1, “Moreyra, Raúl Esteban y otros s /infracción a la ley 22.415”, sent. del 18/6/19).

1.2) Que, en ese marco, y a pesar del tiempo transcurrido hasta que se resolvió la situación procesal de los apelantes, teniendo en cuenta las características particulares del caso y de conformidad con los parámetros asentados en los





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

precedentes de la CSJN, esta Sala considera que dicha extensión temporal y, esencialmente del trámite de las actuaciones en general, no implicarían una vulneración al principio que exceda las pautas de razonabilidad que deben contemplarse en estos supuestos.

En efecto, del estudio de la causa puede observarse que los hechos investigados revisten complejidad, pues la pesquisa que se originó con un control de rutina de las fuerzas de seguridad, luego se orientó a dilucidar hipótesis delictivas vinculadas a la existencia de una organización destinada a realizar actividades de adquisición de mercadería provenientes de contrabando, lo que supuso el inicio de diversas tareas de investigación, intervenciones telefónicas y múltiples allanamientos.

Así las cosas, el agravio de los recurrentes asegurando que existe una “demora irrazonable e injustificada” de una causa que se formó en 2019, no guarda relación temporal y gravedad con los precedentes en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró vulnerado el estándar de plazo razonable (Fallos: 300:1102 -“Mozzatti”, 25 años-, en un caso de tentativa de estafa; 323:982 -“Amadeo de Roth”, 19 años-, sobre lesiones culposas; 327:327 -“Barra”, 15 años-, en una defraudación por administración fraudulenta; 327:4815 -“Egea”, 20 años-, defraudación; 329:445 -“Podestá”, 14 años-, defraudación y prevaricato; 330:3640 -“Acerbo”, 15 años-, contrabando; 331:2319 -“Santander”, 15 años-, robo calificado; y 332:1512 -“Salgado”, 17 años-, defraudación a la administración pública) y, de igual forma, los analizados por la Corte

Fecha de firma: 26/04/2024

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARTIN GOMEZ DIEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#33094312#409361467#20240425122035898

Interamericana de Derechos Humanos (casos “Heliodoro Portugal vs. Panamá”, sent. del 12/8/08 -18 años-; “Masacre de las dos Erres vs. Guatemala”, sent. del 24/11/09 -15 años-; “Radilla Pacheco vs. México”, sent. del 23/11/09 -17 años- y “García y Familiares vs Guatemala”, sent. del 29/11/12 -25 años-).

En esas condiciones, por los fundamentos expuestos y teniendo en cuenta además que no transcurrió el término que la ley establece para que pierda vigencia la acción penal, se rechaza el agravio.

2.1) Que, en relación a la responsabilidad penal de los apelantes respecto al encubrimiento de contrabando, se considera que existen pruebas suficientes para demostrar, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la participación que se les asignó en el decisorio impugnado.

En este sentido, a raíz de las diversas tareas de investigación e intervenciones telefónicas, se pudo tener por probada la participación de J■■■■, M■■■■, T■■■■ C■■■■ y C■■■■ en la recepción de mercadería de contrabando, ingresada por pasos no habilitados, evitando así los correspondientes controles de Aduana y de Gendarmería Nacional; todo ello, valiéndose a su vez, de la información que suministraba M■■■■, a raíz del conocimiento que por su condición de gendarme tenía de los operativos de la fuerza que integraba.

Concretamente, en relación a los roles que detentaría dentro de la organización, han sido adecuadamente descriptos en la resolución apelada y en base al cuadro probatorio de la siguiente manera: Diego Armando G■■■■ y Cristian David Z■■■■ organizaban el transporte de las mercaderías





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

provenientes del contrabando, quienes coordinaban con Ana Gabriela y Federico T■■■■ C■■■■ para que cumplan la función de “campanas” en el momento de su traslado. Misma ocupación tenía Lourdes J■■■■ junto a su pareja Eduardo Diego T■■■■, quienes, además la acopiaban en su domicilio, siendo Víctor Hugo C■■■■ el encargado de repartirla y venderla.

Por otro lado, Rodrigo Nicolás M■■■■, quien cumplía funciones en el Escuadrón 20 de “Orán” de Gendarmería Nacional, brindaba información a G■■■■ y Z■■■■ sobre la ubicación de los controles, a fin de que el transporte de la mercadería pueda realizarse sin obstáculos, recibiendo a cambio una suma de dinero por parte de G■■■■.

Cabe agregar, que, del mismo modo, M■■■■ recibía información acerca de otras organizaciones relacionadas al transporte de mercadería y que realizaba procedimientos sobre estas personas, procediendo al secuestro de dichos elementos para su posterior entrega a G■■■■, también a cambio de dinero (ver fs. 175 vta.).

Es aquí donde cabe poner de relieve las transcripciones telefónicas y tareas de investigación que fueron detalladas en los puntos 4) y 6) de esta resolución, de las que se desprende que los imputados, contrariamente a lo manifestado por sus respectivas defensas, habrían intervenido en las maniobras ilícitas, cumpliendo cada uno con una función determinada (cfr. fs. 82/3, 78/94, 132, 169/70, 175 vta., 193, 201 vta., 278, 298/303, 314 /7 del expediente principal).

Fecha de firma: 26/04/2024

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARTIN GOMEZ DIEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#33094312#409361467#20240425122035898

En efecto, de allí surge una constante adquisición de mercadería ilegal (a saber: cigarrillos de origen extranjero, hojas de coca, electrodomésticos, ropa etc.), su ocultamiento y su “cuidado”, con la finalidad de comercializarla. Ello, con una clara intención de eludir los controles aduaneros y de las fuerzas de seguridad, valiéndose para eso del nombrado gendarme.

Sumado a lo expuesto, es dable destacar el resultado de los allanamientos practicados sobre los domicilios de los recurrentes, en los que se incautó gran cantidad de hojas de coca -aproximadamente doscientos noventa y un kilos- cigarrillos de origen extranjero -alrededor de cuatro mil seiscientos-, nueve balanzas y once bolsas similares a las utilizadas para transportar hojas de coca, entre otros objetos.

Es que, todo lo antedicho se condice con la tesis sostenida por el juez de grado y la fiscalía respecto a que los imputados se relacionarían con actividades dedicadas al encubrimiento de mercadería proveniente de contrabando.

2.2) Que en el mismo sentido y contrariamente a lo argüido por la defensa de M[REDACTED], también se encuentra provisoriamente comprobado el elemento subjetivo requerido para la configuración del encubrimiento, en tanto, a pesar de que se desconozcan las circunstancias precisas sobre el ingreso al país de la mercadería incautada, puede presumirse (tal los términos del art. 874 inc. d) del Código Aduanero) la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

preexistencia del contrabando por otros elementos, como ser su cantidad, el origen foráneo de los elementos incautados, y muy especialmente su volumen y valor.

Es este mismo escenario el que nos lleva a tener por demostrado el elemento subjetivo, pues en “materia aduanera, basta con que el encubridor a manera de dolo eventual deba presumir que la mercadería proviene del contrabando” (cfr. Vidal Albarracín, Héctor Guillermo; “Delitos Aduaneros”, 3ª edición ampliada y actualizada, Corrientes, Mave Editora 2010, págs. 440/447), por lo que “no es necesaria la concurrencia de dolo específico en la conducta del autor para que se configure el encubrimiento. Basta la concurrencia del dolo eventual según se desprende de la fuerte duda que necesariamente debió haber tenido el acusado al recibir dichos efectos” (cfr. Pruski, Bárbara Elizabeth, “Delito de Contrabando”, Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2015, págs. 111/117).

2.3) Que, por otro lado, también debe rechazarse el agravio respecto a lo alegado por las defensas de los imputados en relación a la agravante por habitualidad de la conducta reprochada.

Sobre el particular, se dijo que la habitualidad “supone por un lado la repetición de los actos de receptación y por otro una cierta permanencia en la actividad específica, revelada por la continuación en ella como costumbre, como un obrar habitual, aunque no sea un medio de vida. Habitualidad no equivale a profesionalidad, pues ésta puede darse en un acto único cuando la subjetividad del autor está lanzada a la



recepción profesional de la actividad (...)” (D’Alessio, Andrés José, “Código Penal de la Nación Comentado y Anotado”, segunda edición actualizada y ampliada, Tomo III, Leyes Especiales Comentadas, La Ley S.A.E., Buenos Aires, 2010, pág. 821).

En este orden y en concordancia con lo expuesto por el acusador público, se entiende que la continuidad en la actividad ilícita atribuida se encuentra en esta instancia probada por la propia investigación, la que se inició con fecha 26/1/19 y concluyó el 30/9/20, más de un año y medio después, con los allanamientos en los domicilios de los encartados y sus respectivas detenciones; a lo que se suma la intensidad de los hechos de contrabando y la venta de mercadería de ese origen que se observaron de los diálogos antes interceptados.

Así, de las diversas intervenciones telefónicas y tareas de investigación, se desprende la reiterada participación de cada uno de los encausados en la actividad de encubrimiento de contrabando, lo que permite deducir que era una conducta frecuente de aquellos, por lo que se agrava el delito tipificado en el artículo 874 inc. 1 apartado “d”, por lo establecido en el inciso 3 apartado “b” de la ley 22.415.

Ello, sumado a que Diego Armando G[REDACTED] se encuentra en el Registro de Infractores Aduaneros por tenencia injustificada de mercadería, lo que no hace más que reforzar dicha tesis (fs. 1175/80, 1182/3 y 1186/9 del expediente principal).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

3) Que respecto del cohecho pasivo por el que se procesó a M[REDACTED] descubierto a partir del mensaje del 7/1/20 en el que le dice a Z[REDACTED] “che 75 me pidió ls a 28 15 para cada uno cn eso borran el audio q me grabaron y declaran que solo encontraron el arma q no saben de quien era ...” lleva a confirmar la resolución, pues las conversación que allí mantuvieron permite presumir -en el grado de probabilidad requerido en esta etapa- que el monto reclamado por M[REDACTED] no hacía referencia a la multa que debía pagar G[REDACTED], como lo alegó su defensa. Pues va de suyo que ese argumento no resulta razonable toda vez que no es lógico afirmar que en ese diálogo simplemente se “hacía el favor” de dar a conocer el importe de la multa que correspondería abonar, sobre todo teniendo en cuenta que gendarmería no establece su valor ni tampoco podría cobrarlas, por lo que, en su caso, correspondería que se forme una causa penal, la que luego podría derivar o no en la aplicación de una multa.

Así, tal como fue citado en el mentado punto 4) de esta resolución, y a fs. 169 vta./170 del expediente principal, M[REDACTED] le relató a Z[REDACTED] lo que iba a suceder con G[REDACTED], quien se encontraba detenido por la tenencia de un arma sin documentación, aclarándole “(...) yo ahí le invento la historia al fiscal, le hago actuaciones y se va (...) pero le va a salir caro me dice (...)”, ello refiriéndose a lo que le habría manifestado otra agente de Gendarmería quien estaría a cargo del procedimiento.

Sumado a ello, en otra conversación de similares características, M[REDACTED] le expresa a Diego Armando G[REDACTED]: “lo de la coca es 213 mil lo que le di en puchos a Cris 114

Fecha de firma: 26/04/2024

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARTIN GOMEZ DIEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#33094312#409361467#20240425122035898

y la mensual, la mensual me urge más así ya cancelo lo otro, avísame al medio (...) claro, 7 chanchos y 2 cajas de rodeo y una de Hill (...) y ayer le di 9 cajas” (fs. 175/vta. del expediente principal).

Así las cosas, el citado contexto en el que fue sostenido el diálogo sobre el procedimiento de la Seccional 28 de la Gendarmería Nacional, sumado al precedentemente transcripto y a los restantes obrantes en la causa, permite inferir de manera provisoria que el gendarme percibía sumas de dinero a cambio de información sobre la ubicación de las patrullas y secuestro de mercadería de la fuerza que integraba.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se considera acreditada, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, la figura de cohecho pasivo (art. 256 del C.P.), dado que se pudo tener por probada en autos la aceptación de dinero a cambio de no hacer algo relativo a sus funciones. En este caso, como ya se explicó, el imputado recibía sumas de dinero como retribución por no controlar a los miembros de la organización, indicar el lugar puntual en donde se encontraban los miembros de Gendarmería y entregar mercadería secuestrada a otras personas a los encausados para que efectúen su venta (ver fs. 132 vta.).

4) Que, en otro orden, distinto es el temperamento que cabe adoptar respecto al delito de lavado de activos endilgado a J [REDACTED] y M [REDACTED], dado que las pruebas recabadas hasta el momento no resultan suficientes para el dictado de sus procesamientos.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

En efecto, es dable recordar que los informes elaborados por la Sección Penal Tributaria AFIP- DGI- Dirección Regional Salta, la Unidad de Información Financiera (en el caso de J■■■■) y la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Orán de Gendarmería Nacional, fueron contestes al señalar que M■■■■ obtuvo varios vehículos -un Chevrolet Corsa adquirido en julio de 2016, valuado en \$103.000; un Volkswagen Voyage en agosto del 2017 valuado en \$220.000 y una Motomel en agosto del 2020, valuada en \$110.000- percibiendo en el 2019 ingresos por \$858.905 y en 2020 por \$834.968 como remuneración por sus tareas de Gendarme. Por otra parte, en relación a J■■■■, se informó que en el mes de abril del 2018 adquirió una motocicleta Keller KN-110-8 valuada en \$18.800 y en mayo del 2019 un Volkswagen Bora, valuado en \$120.000, ello, sin tener ninguna actividad registrada.

Ahora bien, teniendo en cuenta ello, y sin perjuicio de que esta Sala los consideró coautores del delito de encubrimiento de contrabando, los datos recolectados hasta el momento no alcanzan para determinar, siquiera con el grado de probabilidad exigido en la etapa, que M■■■■ y J■■■■ hayan perpretado la conducta descripta a la figura del art. 303 del C.P.

Es que si bien resulta cuanto menos sospechoso -en el caso de J■■■■- que no existan pruebas sobre una actividad económica lícita desarrollada compatible con los bienes que se indicó aquella posee, lo cierto es que “la falta de justificación del patrimonio que ostenta” (objeto del fundamento del reproche de lavado de activos en la resolución apelada) no

Fecha de firma: 26/04/2024

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARTIN GOMEZ DIEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#33094312#409361467#20240425122035898

configura, *per se*, una hipótesis de lavado de dinero, en tanto que, como ya lo tiene dicho esta Sala, la prueba relativa a su origen ilícito [de los bienes] y la posible operatoria tendiente a otorgarle una apariencia legítima, debe acreditarse por los órganos de la persecución penal, sin que de esa sola circunstancia (la no acreditación actual del origen lícito) pueda derivarse un delito penal (in re nro. FSA 12643/2015 caratulada “Romero Tarqui Darío s/ infracción a la ley 19.359 y 22.415” sent. del 28/11/17; FSA 7526/2016 caratulada “Arguello Gómez, Facundo; Cabana, Estanislao Artemio; P. Villella, Santiago Daniel; Monzón, Marcela Viviana Gabriela y otros s/ infracción a la ley 24.769”, sent. del 13/8/19; nro. FSA 10063/2018/1 caratulada: “Serapio, Graciela Dolores s/ infracción al artículo 303 del CP – Legajo de apelación”, sent. del 17/4/20, entre otras). Pues, de lo contrario, toda inconsistencia patrimonial llevaría, sin más, a calificar una conducta típica penal por su sola tenencia injustificada.

Por lo tanto, la mera sustitución del dinero por otros bienes no cumple el objetivo espurio que busca reprimir el tipo penal, pues como dice Donna “no se trata de cambiar una casa por un castillo, sino que esa casa o propiedad aparezca como legítima cuando no lo es” (Donna, Derecho Penal – Parte Especial, pág. 490); lo que se cumple cuando existe una conducta de blanqueo o intención de blanqueo respecto de los fondos provenientes del delito.

Por ello, y más allá de la genérica mención de que la imputada, comercializaba mercadería de contrabando (electrodomésticos, hojas de coca, cigarrillos, etc.)





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

“obteniendo ganancias en efectivo con las que (...) adquirirían vehículos registrados a su nombre con clara intención de ingresarlos al sistema financiero y así justificar su incremento patrimonial (...)”, no se aportaron elementos que acrediten, aún de manera provisoria, la forma en que habrían sido convertidos, administrados, vendidos, gravados, disimulados o puestos en circulación con la posible consecuencia de que su génesis adquiriera apariencia de licitud.

Además, también respecto de J [REDACTED], se dedujo que los vehículos que había adquirido sin tener registrada actividad alguna formaban parte de una maniobra de blanqueo demostrada en el caso de su pareja T [REDACTED] -coencausado, quien se encontraba como autorizado para conducir esos rodados-, por lo que se entendió que aquella actuaba como un testaferro y que dichos automóviles se sumaban a los vehículos adquiridos por éste último, siendo que así, en conjunto, superaban la condición objetiva de punibilidad establecida por el art. 303 del Código Penal.

Es que, tales afirmaciones -a más de contradictorio con la hipótesis delictiva desarrollada en el fallo- no disponen del sustento probatorio suficiente para tener por cierto esos extremos, en tanto no se incorporó ninguna prueba relativa a la maniobra tendiente a disimularlo, extremo exigido en la figura cuestionada.

Sin perjuicio de ello, cabe destacar que con la reciente modificación del artículo 303 inciso 1 del Código Penal por la ley 27.739 (B.O. 15/3/24), la conducta deviene atípica

Fecha de firma: 26/04/2024

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARTIN GOMEZ DIEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#33094312#409361467#20240425122035898

(en función del principio de retroactividad de la ley penal más benigna -cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/infracción a la ley 24.769, del 28/10/21-), porque el monto de punibilidad ahora asciende a 150 salarios mínimos vitales y móviles al momento del hecho, lo que para la fecha de los hechos representaba \$1.695.000 y el monto atribuido a M[REDACTED] es de \$433.000 y a J[REDACTED] de \$138.000.

Ello sin perjuicio del posible adecuamiento de la conducta de J[REDACTED] en el delito de lavado menor, previsto en el inc. 4 del art. 303 del C.P., siempre y cuando en el nuevo análisis que se encomienda realizar a la instrucción sobre los extremos típicos del delito de lavado de dinero a la luz de los precedentes antes citados, en concreto, si en función de los informes de fs. 1393/1411 y 1420/3 (que no se encontraban agregados a la causa al momento de dictarse el procesamiento) es posible concluir en que la imputada realizó alguna de las operaciones previstas en la norma (convertir, transferir, administrar, vender, disimular, etc.) activos de un modo de darle apariencia de legalidad, pues va de suyo que la maniobra de “maquillaje” exigida no se materializa con la sola compra de un vehículo cuyos fondos de adquisición no pasan a tener apariencia de licitud por el solo hecho de la compra, que en las condiciones relatadas no se presentaron en “apariencia de origen lícito”.

Por otro lado, en relación a la imputación de M[REDACTED], se sostuvo que: “(...) se denota una importante cantidad de dinero que ingresaba al patrimonio de M[REDACTED], más





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

allá de sus ingresos como Gendarme, que en solo tres meses ya superaba la condición objetiva de punibilidad establecida por el art. 303 del C.P. (...) ahora bien, con esa importante cantidad de dinero de origen ilícito dicho encartado podría haber adquirido los vehículos registrados a su nombre o, inclusive, haberla introducido en el circuito económico mediante la compra en efectivo de bienes de consumo, convirtiendo de esa manera el dinero mal habido en otros que aparenten licitud (...). De lo dicho surge que el juez se basó únicamente en probabilidades, sin especificar concretamente cuál fue la maniobra de lavado, ni sobre qué activo concreto ocurrió, extremos que -como se dijo- resultan indispensables a fin de evaluar correctamente su conducta.

Es que resultan insuficientes las expresiones genéricas que se realiza en el fallo con el fin de justificar la comisión del delito de lavado de activos tipificado en el artículo 303 inciso 1º del Código Penal de la Nación. Más aún, si tenemos en consideración, en el caso de M[REDACTED], que no resultarían exorbitantes sus adquisiciones en correlación con sus remuneraciones percibidas por la Gendarmería Nacional.

Luego y como se anticipó, es dable destacar que con fecha 23/8/23 –días previos al resolutorio de mérito- se requirió a la AFIP y a la UIF que realice un análisis patrimonial sobre los siguientes familiares de Rodrigo Nicolás M[REDACTED]: Victoria Delfina M[REDACTED] M[REDACTED] (hija), María M[REDACTED] A[REDACTED] (esposa) y Estela Maris B[REDACTED] (madre). Asimismo, se solicitó al Jefe de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán” de



Gendarmería Nacional que efectúe un informe sobre la situación financiera y patrimonial del encausado M[REDACTED] y de sus mentados familiares, lo que se agregó a fs. 1393/1411 y 1420/3 del *lex* 100.

De ese modo, y toda vez que por las razones que antes se explicaron no surgen elementos suficientes para tener por acreditado -con el grado de probabilidad exigido en esta etapa- las exigencias típicas del lavado de activos y en el caso restan medidas por analizar, corresponde dictar la falta de mérito para ambos sobre esa imputación.

5) Que respecto al monto del embargo dispuesto en contra de los encartados, cabe precisar que, como se sostuvo en reiteradas sentencias de este Tribunal, el art. 518 del Código Procesal Penal faculta a los jueces a fijar una suma de dinero que garantice la eventual pena pecuniaria, indemnización civil y costas a que diera lugar una posible condena de los procesados, finalidades en función de las cuales el monto fijado no se advierte como desproporcionado o arbitrario, teniendo en cuenta el valor de la mercadería y las eventuales multas que pudieren imponerse en caso de ser condenados en sede judicial o administrativa.

6) Que, por último, toda vez que de las intervenciones telefónicas obrantes a fs. 169 vta./172 podría surgir la posible comisión de un delito con la intervención de otros funcionarios públicos aún no individualizados; a fin de evitar mayores demoras en la tramitación de esta causa, corresponde





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

encomendar al instructor que forme nuevas actuaciones para que se investigue dicha circunstancia, debiendo evaluar delegarle la pesquisa al fiscal en los términos del art. 196 del CPPN.

Por todo lo expuesto, se

RESUELVE:

I- RECHAZAR el recurso de apelación presentado por la defensa de Federico Javier T [REDACTED] C [REDACTED] y de Víctor Hugo C [REDACTED] y **CONFIRMAR** sus respectivos procesamientos por considerarlos *prima facie* coautores materiales y penalmente responsables del delito de encubrimiento agravado de contrabando de importación de mercadería (art. 874 inc. 1 apartado “d” e inc. 3 apartado “b” de la ley 22.415).

II- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Lourdes J [REDACTED] y, en consecuencia, **REVOCAR** la resolución recurrida en cuanto dispuso su procesamiento por el delito de lavado de activos (art. 303 C.P.), dictándose en su reemplazo su **FALTA DE MÉRITO** para procesarla o sobreseerla, en los términos del artículo 309 del C.P.P.N., debiendo el *a quo* actuar conforme a lo expuesto en los considerandos; y **CONFIRMAR** el punto II de dicho auto en cuanto decretó su procesamiento sin prisión preventiva por considerarla *prima facie* coautora material y penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado de contrabando de importación de mercadería (art. 874 inc. 1 apartado “d” e inc. 3 apartado “b” de la ley 22.415).

Fecha de firma: 26/04/2024

Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARTIN GOMEZ DIEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#33094312#409361467#20240425122035898

III- HACER LUGAR

PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Rodrigo Nicolás M[REDACTED] y, en consecuencia, **REVOCAR** la resolución recurrida en cuanto dispuso su procesamiento por el delito de lavado de activos (art. 303 C.P.), dictándose en su reemplazo su **FALTA DE MÉRITO** para procesarlo o sobreseerlo, en los términos del artículo 309 del C.P.P.N., debiendo el *a quo* actuar conforme a lo expuesto en los considerandos.

IV- CONFIRMAR el procesamiento de

Rodrigo Nicolás M[REDACTED] sin prisión preventiva por considerarlo *prima facie* coautor material y penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado de contrabando de importación de mercadería (art. 874 inc. 1 apartado “d” e inc. 3 apartado “a” y “b” de la ley 22.415) en concurso real con cohecho pasivo (art. 256 del Código Penal).

V- CONFIRMAR el punto V de dicha

resolución en cuanto mandó a trabar embargo sobre los bienes que tuvieren los encartados recurrentes hasta cubrir la suma de dos millones de pesos (\$2.000.000) a cada uno, conforme lo dispuesto por el art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación.

VI- ENCOMENDAR al instructor a

tenor de lo dispuesto en el punto 6) del considerando.

VII- REGÍSTRESE, notifíquese y

publíquese en los términos de las Acordadas 15 y 24 de 2013 de la CSJN, y oportunamente devuélvase.

